

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN**



**SALA LABORAL**  
**Acta N°232**

Medellín, diecisiete (17) de agosto de dos mil veintidós (2022)

En la fecha, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelve el recurso de apelación interpuesto en el proceso ordinario laboral promovido por el señor **HUMBERTO DE JESÚS GÓMEZ GÓMEZ** contra **C.I. UNIBAN S.A. y COLPENSIONES**.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita.

**ANTECEDENTES**

**Pretensiones**

El demandante solicita que se condene a **C.I. Uniban S.A.** a constituir título pensional por el periodo comprendido entre el **29 de diciembre de 1974** y el **30 de octubre de 1986** y a **Colpensiones** a reconocer y pagar la reliquidación de la pensión de vejez teniendo en cuenta estos tiempos.

**Hechos**

Como fundamento de sus pretensiones manifiesta que laboró al servicio de **C.I. Uniban S.A.** entre el **29 de diciembre de 1974** y el **3 de noviembre de 1994**, sin que entre la fecha inicial y el **30 de octubre de 1986** se realizara aportes en pensiones por parte del empleador.

En la actualidad disfruta de pensión de vejez reconocida por **Colpensiones** a través de la **Resolución 011179 de 2008**, cuya mesada fue liquidada teniendo en cuenta una tasa de reemplazo del 78% liquidada con base en 1051 semanas cotizadas.

Con el fin de que fuera incrementado el valor de su mesada pensional reclamó al empleador **C.I. Uniban S.A.** para que realizara el pago de los aportes, sin embargo, su petición fue negada indicando que el llamado a afiliación en Apartadó, Antioquia, apenas se hizo el **31 de octubre de 1986**.

#### **Contestación C.I. Uniban S.A.**

La sociedad demandada a través de apoderado dio respuesta precisando que el actor prestó sus servicios desde el **11 de septiembre de 1978**, y señaló que es cierto que entre esa fecha y el 30 de octubre de 1986 no efectuó aportes al **ISS**, puesto que, para ese momento en la zona geográfica en donde se prestó el servicio no se había hecho el llamado para afiliación, lo que solo ocurrió el **31 de octubre de 1986**.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: inexistencia de la obligación, caducidad de la acción y prescripción de los derechos y buena fe.

#### **Contestación Colpensiones**

La entidad demandada a través de apoderado manifestó que es cierto que el demandante fue su afiliado y en la actualidad se encuentra pensionado en los términos descritos, indicando en lo referente a la vinculación con el empleador **C.I. Uniban S.A.** que no le constan los hechos.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: imposibilidad de reliquidar la pensión de vejez, prescripción, buena fe e imposibilidad de condena en costas.

#### **Sentencia de primera instancia**

La Juez Sexta Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia del **25 de abril de 2022**, negó las pretensiones del demandante por considerar que antes del **31 de octubre de 1986** el empleador estaba en imposibilidad de vincular a sus trabajadores al sistema de pensiones por no existir cobertura geográfica en el lugar en el que se prestaron sus servicios.

Como fundamento de su decisión indicó que la posibilidad de validar tiempos sin cotizaciones a través del pago de cálculo actuarial por periodos en que no existía llamado a afiliación por parte del ISS, solo es aplicable para eventos en que sean necesarias para acceder al derecho pensional, prerrogativa que no se puede extender a quienes como el actor pretende el incremento de su mesada, puesto que, no se puede imponer al empleador efectuar el pago de un cálculo actuarial cuando por ley no estaba obligado a cotizar.

Finalmente, citó la sentencia T-281 de 2020, para establecer que al no existir obligación legal del empleador de cotizar antes del llamado a afiliación al **ISS**, la forma para validar semanas-cuando sea necesaria- consiste en que debe hacerse una contribución tripartita en la que el empleador asume el 50% del valor del cálculo actuarial y estado y trabajador asumen el 25% cada uno.

Esta decisión no la compartió el apoderado del demandante, motivo por el cual la recurrió en los siguientes términos:

### **Recurso parte demandante**

El apoderado recurrente solicita que se **revoque** la decisión de primera instancia por considerar que la misma desconoce el precedente pacífico y reiterado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en materia de pago de cálculo actuarial por los periodos en que no existía cobertura en la zona geográfica en la que se prestaron sus servicios, sin que cumpla con la carga de transparencia, puesto que no presenta una motivación suficiente para apartarse de la jurisprudencia vinculante.

Señala que no le puede ser aplicada la sentencia T-281 de 2020 por cuanto la misma constituye un precedente aislado y proferido en un supuesto diferente al que se estudia, pues debe tenerse en cuenta que en este caso el vínculo laboral del actor se encontraba vigente al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993.

### **Alegatos de Conclusión**

Corrido el término de traslado, el apoderado de **Colpensiones** indicó que la responsabilidad de efectuar el pago de título pensional esta en cabeza del empleador y que en el caso de que este realice el pago de la misma esa entidad procederá a reconocer los derechos del pensionado, una vez esté presente reclamación administrativa.

## CONSIDERACIONES

### Problema jurídico

Los problemas jurídicos a resolver en esta segunda instancia de conformidad con el recurso interpuesto, serán: (i) Determinar si **C.I. Uniban S.A.** está obligado a reconocer y pagar cálculo actuarial por el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1978 y el 30 de octubre de 1986 en favor del señor **Humberto de Jesús Gómez Gómez**, y (ii) Establecer si el demandante es beneficiario del régimen de transición y si la aplicación del Decreto 758 de 1990 como norma anterior le da derecho a que su mesada pensional sea reajustada teniendo en cuenta una tasa de reemplazo del 90%.

### Pruebas relevantes

Antes de resolver considera la Sala importante realizar las siguientes precisiones de conformidad con la prueba obrante en el expediente:

1. Entre el señor **Humberto de Jesús Gómez Gómez** y **C.I. Uniban S.A.** se suscribió contrato de trabajo el **11 de septiembre de 1978** (01/págs.110-111).
2. Según se observa en la historia laboral expedida por **Colpensiones** el empleador **C.I. Uniban S.A.** realizó aportes entre el 31 de octubre de 1986 y el 3 de noviembre de 1994 (01/pág.49).
3. El **ISS** hoy **Colpensiones** mediante **Resolución 011179 de 2008**, le reconoció al demandante la pensión de vejez en cuantía inicial de \$612.727 pagadera a partir del 11 de agosto de 2007 (01/pág.28).
4. Para liquidar el valor de la prestación se tuvo en cuenta un IBL de \$785.548 y una tasa de reemplazo del 78% atendiendo a un total de **1051 semanas** de cotización (01/pág.28).

Efectuadas las anteriores precisiones procederá la Sala al análisis del problema jurídico puesto en su conocimiento.

### Obligación del empleador de pagar título pensional por periodos de tiempo en los que no existía cobertura del ISS

La juez de primera instancia negó la pretensión del actor encaminada al pago de cálculo actuarial por el periodo en que habiendo prestado sus servicios a

**C.I. Uniban S.A.** no se realizaron cotizaciones en pensiones por no existir cobertura de afiliación en la zona geográfica, lo que justificó en que mal podía exigírsele a un empleador que estaba imposibilitado para cotizar en virtud de las normas legales vigentes el pago de la mismas, sin que esa carga le pueda ser impuesta a partir de conceptos como el deber de aprovisionamiento y más si se tiene en cuenta que la persona que reclama dicho pago cumplió con los requisitos para acceder a la pensión de vejez.

Como argumento de autoridad para sustentar su posición reprodujo la sentencia T-281 de 2020, en la que la Corte Constitucional estableció una regla de contribución para el pago del título pensional consistente en que cada uno de los actores del sistema debe asumir una proporción del valor, correspondiendo al empleador el pago del 50% y al Estado y el trabajador un 25%.

Esta decisión es debatida por el apoderado del demandante planteando dos argumentos fundamentales: (i) existe disanalogía entre el caso estudiado en la sentencia T-281 de 2020 y el caso estudiado y (ii) la sentencia T-281 de 2020 no constituye un precedente vinculante por cuanto se trata de una sentencia que fija una regla aislada y pasa por alto la jurisprudencia vigente de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

En lo que refiere al primero de los argumentos, encuentra la Sala que en efecto le asiste razón al apelante como quiera que la regla de decisión contenida en la sentencia T-281 de 2020 fue aplicada a tiempos de servicios prestados con anterioridad y para el reconocimiento de una pensión causada con anterioridad a la ley 100 de 1993, lo que explica el Alto Tribunal en esa misma providencia cuando citando la T-435 de 2014 expresa:

Así, desde esta perspectiva, ese mínimo de justicia se logra reiterando las reglas que estableció la Sentencia T-435 de 2014. En aquella oportunidad, se sostuvo que, para conceder el derecho a la pensión de vejez, en casos que contengan las mismas características del presente, el juez constitucional debe constatar la concurrencia de las siguientes condiciones, a saber:

**“(i) La relación laboral se inició y se extinguió antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 [...]; (ii) No cumplir con los presupuestos para acceder a la pensión de jubilación prevista en el Código Sustantivo del Trabajo, por no haber laborado 20 años de manera continua con el mismo empleador; (iii) Tampoco cumplir los requisitos para acceder a la “pensión sanción” o a su equivalente, ni para**

beneficiarse de las hipótesis de compartibilidad establecidas y ya explicadas, entre otras normas, en el Decreto 3041 de 1966; (iv) Si durante la vigencia de la relación laboral el empleador no tuvo la obligación legal de afiliarlo al ISS, ni de pagar las respectivas cotizaciones periódicas; y (v) El tiempo cotizado sea insuficiente para acceder a la pensión de vejez, pero que sumado con el período trabajado sobre el cual no se realizaron aportes, cumple con el número necesario de semanas para obtener la prestación [...] o estaría muy cerca de ello” (destacado de la Sala).

En ese orden, al existir dis-analogía entre los casos comparados, la regla de decisión contenida en la sentencia de constitucionalidad mal puede aplicarse en este caso, advirtiéndose en ello un error de la juez a-quo, por lo que se advierte el precedente contenido en la T-281 de 2020 no es aplicable a este caso, pues como características diferenciales se trata de un contrato laboral y una pensión causada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

De otro lado, especial pronunciamiento merece lo manifestado por la juez a-quo en el sentido de que al no existir un llamado a afiliación no se puede responsabilizar al empleador del pago del cálculo actuarial, posición respecto de la cual debe recordarse que de conformidad con el artículo 72 de la Ley 90 de 1946, los empleadores tenían a cargo la prestación de pensión de vejez hasta tanto el Instituto de Seguros Sociales asumiera la obligación y ello implicaba una obligación de hacer un aprovisionamiento con el fin de cumplir con esta obligación patronal, debiendo en el caso que sea el sistema general de pensiones quien reconozca la prestación realizar el aporte de estos periodos a través de un cálculo actuarial, recordando en este sentido que no se trata de la imposición de una sanción por un incumplimiento, sino de la aplicación de principios y valores superiores, dado que no puede “...imponérsele al trabajador una carga que afecte su derecho a la pensión, sea porque se desconocieron esos períodos, ora porque el tránsito legislativo en vez de garantizarle el acceso a la prestación, como se lo propuso el nuevo esquema, se le frustre ese mismo derecho (sentencia CSJ SL rad. 45107 del 24 de septiembre de 2014).

Esta tesis, por demás ha sido la sostenida desde la sentencia 32922 del 22 de julio de 2009, reiterada en la CSJ SL9856-2014 y reafirmada en la CSJ SL 313 de 2022, providencias en las que se establece como regla de decisión que cuando sea viable y necesario que los tiempos trabajados y no cotizados por la ausencia de cobertura del sistema general de pensiones sean habilitados, se debe acceder a esta posibilidad a efectos de que el trabajador pueda acceder al derecho pensional o a la mejora de este.

Por lo demás en la última de las providencias citadas la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, hizo énfasis en que la subrogación pensional del ISS por el acto de la afiliación, no hace desaparecer la obligación de aprovisionamiento en cabeza del empleador. En palabras del Alto Tribunal:

Esa misma línea de pensamiento, sustentada en que de conformidad con los principios constitucionales que informan la seguridad social, el trabajador no debe soportar el efecto negativo derivado del hecho de que en ese periodo de tiempo no se hayan materializado las cotizaciones, ha sido seguida también por la Corte Constitucional, lo cual no significa, contrario a lo afirmado por la impugnante, que no existió el deber de aprovisionamiento del capital que contribuiría al financiamiento de la pensión una vez el ISS asumiera los riesgos de IVM.

A partir de lo anterior, se encuentra que es consecuente la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de establecer que si el tiempo que se solicita habilitar a través del cálculo actuarial es necesario para el acceso al derecho o el mejoramiento del mismo, no debe asumir el trabajador la pérdida del mismo, máxime si existía una obligación de aprovisionamiento a cargo del empleador, aspecto que incluso es reiterado por la Corte Constitucional en la sentencia T-399 de 2021, en la que manifestó:

De lo anterior, se infiere que las obligaciones pensionales no surgieron con la expedición de la Ley 100 de 1993. Como se vio, la normatividad existente antes de la Constitución de 1991 incluía cláusulas legales destinadas al amparo pensional de los trabajadores, con la asignación de deberes prestacionales a cargo de los empleadores, de ahí se deriva la obligación de aprovisionar el capital necesario, respeto de los tiempos de servicio prestados por el respectivo empleado, los cuales, además, estarían llamados a ser acumulados en el cómputo de los requisitos exigidos para acceder a la prestación.

En estos escenarios, el respectivo empleador está llamado a trasladar al ISS, hoy Colpensiones, el capital del correspondiente aprovisionamiento de la pensión de vejez, con base en la liquidación actuarial fijada por la entidad administradora, y que será recibido en calidad de bono o título pensional, pues, “no se puede traducir en la pérdida de los recursos que la empresa ha debido aprovisionar o aprovisionaba en ese momento para efectos pensionales, pues ello equivaldría a la vulneración del derecho a la seguridad social del trabajador”.

De no asumir esta posición, y desconocer los tiempos efectivamente laborados antes del llamamiento que hiciera el ISS, bajo el argumento de que no estaba obligado a realizar dichos aportes, se desconocería el deber de aprovisionamiento contenido en el artículo 72 de la Ley 90 de 1946 y artículo 14 de Ley 6 de 1945, así como el derecho a la seguridad social que se materializa a través del derecho adquirido al reconocimiento de los aportes o de los tiempos laborados y a la efectividad de las cotizaciones de aquellos trabajadores.

A partir de lo expuesto encuentra la Sala que es procedente la condena al pago del cálculo actuarial a cargo del empleador por lo que en este punto se **revocará** la decisión de primera instancia.

### **Del periodo por el que no se efectuó cotizaciones al sistema de pensiones**

Se afirmó en la demanda que el señor **Humberto de Jesús Gómez Gómez** prestó sus servicios **C.I. Uniban S.A.** desde **29 de diciembre de 1974**, afirmación que es desmentida por la sociedad demandada indicando que el contrato de trabajo suscrito entre las partes tiene como fecha inicial el **11 de septiembre de 1978**, no existiendo controversia con respecto a la fecha de terminación del contrato que lo fue el **3 de noviembre de 1994** y la data desde la cual se vinculó al **ISS**, esto es, desde el **31 de octubre de 1986**.

Con el fin de determinar a cuál de las partes le asiste razón en lo referente a la fecha inicial del contrato se procedió a estudiar la prueba obrante en el expediente encontrando que el único elemento que da cuenta de una fecha cierta es el contrato de trabajo que fue aportado por la parte llamada a juicio (01/págs.110-111), por lo que en ausencia de otras pruebas que den cuenta que el contrato inició con antelación a esa fecha se fijará como extremo inicial el **11 de septiembre de 1978**.

Lo anterior supone que entre esa fecha y el **30 de octubre de 1986** transcurrió un total de 8 años, 1 mes y 20 días, lo que equivale a **424,28 semanas** durante las cuales no se realizó cotizaciones al sistema de pensiones y que deberán ser convalidadas previo el pago de cálculo actuarial recibido a satisfacción de **Colpensiones**.

Ahora, con respecto al valor sobre el que deberán efectuarse las cotizaciones al no existir prueba en el expediente del salario percibido por el demandante en las diferentes anualidades, las operaciones tendientes a establecer el valor del



cálculo actuarial deberán realizarse sobre la base del salario mínimo mensual legal vigente para cada anualidad.

Siguiendo este derrotero, se **ordenará a Colpensiones**, que, en un término no superior a un mes contado desde la ejecutoria de la presente providencia proceda a liquidar el cálculo actuarial a cargo del empleador **C.I. Uniban S.A.**, en favor del afiliado **Humberto de Jesús Gómez Gómez**, para lo cual deberá tener en cuenta que el periodo a liquidar es el comprendido entre el **11 de septiembre de 1978** y el **30 de octubre de 1986**, teniendo en cuenta salario mínimo mensual legal vigente para cada anualidad.

Una vez **C.I. Uniban S.A.** reciba por parte de **Colpensiones** la liquidación correspondiente, debe en un plazo no superior a un mes cancelar el título pensional.

#### **Del régimen pensional aplicable y la tasa de reemplazo aplicable**

Dado que no se presenta discusión frente a la norma aplicable al actor para efectos pensionales, que para el caso según la **Resolución 011179 de 2008** es del Decreto 758 de 1990 en virtud del régimen de transición, se advierte que el señor **Gómez Gómez** una vez totalizadas las semanas por las que su empleador debe pagar cálculo actuarial cuenta con un total de 1475 semanas, lo que le da derecho a que su mesada pensional sea calculada con una tasa de reemplazo del 90%.

Lo anterior implica que al IBL de \$785.548 se le aplique una tasa de reemplazo del 90%, lo que da como resultado una mesada pensional que para el año 2007 cuando se reconoció la pensión debió ser de **\$706.993**.

#### **De la procedencia de la prescripción**

Se propuso por parte de **Colpensiones** al dar respuesta a la demanda la excepción de prescripción, lo que supone que al ser reconocido el derecho la procedencia de la misma deba ser estudiada y para tal efecto debe tenerse en cuenta que la pensión cuyo reajuste se reclama fue reconocida por acto administrativo notificado el **4 de junio de 2008** (01/pág.29), luego desde esa fecha contaba con tres años para reclamar el pago del reajuste pensional, sin embargo, **Colpensiones** solo se enteró de una reclamación en ese sentido el día **23 de octubre de 2020** cuando recibió correo electrónico en el que se le informaba de la existencia del proceso (07/pág.1), por lo que solo desde esa fecha puede entenderse interrumpida la prescripción.

Lo anterior implica que los mayores valores que fueron exigibles con anterioridad al **23 de octubre de 2017**, (esto es, hasta la mesada de septiembre de 2017) se encuentran prescritos, existiendo un retroactivo que entre esa fecha y el **31 de julio de 2022** asciende a la suma de **\$ 10.683.249**, como puede observarse en el siguiente cuadro:

Reajuste pensional						
Año	IPC	Valor reconocido	Valor real	Diferencia mensual	# mesadas	Total retroactivo
2017	4,09%	\$ 930.269	\$ 1.073.388	\$ 143.119	4	\$ 572.475
2018	3,18%	\$ 968.317	\$ 1.117.290	\$ 148.972	14	\$ 2.085.613
2019	3,80%	\$ 999.110	\$ 1.152.819	\$ 153.710	14	\$ 2.151.936
2020	1,61%	\$ 1.037.076	\$ 1.196.626	\$ 159.551	14	\$ 2.233.709
2021	5,62%	\$ 1.053.773	\$ 1.215.892	\$ 162.119	14	\$ 2.269.672
2022		\$ 1.112.995	\$ 1.284.225	\$ 171.231	8	\$ 1.369.848
TOTAL						\$ 10.683.249

A partir del **1 de agosto de 2022**, **Colpensiones** deberá continuar reconociendo al actor por concepto de mesada pensional la suma de **\$ 1'284.225** a razón de 14 mesadas por anualidad.

En orden a lo expuesto, se **condenará a Colpensiones**, que, dentro del mes siguiente a la recepción del pago del cálculo actuarial a satisfacción por parte de **C.I. Uniban S.A.** expida resolución en la que reconozca el pago del reajuste pensional, en los términos anteriormente expuestos.

**Descuento en salud a cargo del pensionado**

Unido al retroactivo del mayor valor esta lo atinente a los descuentos en salud, los cuales por ministerio de la ley están a cargo de los pensionados, tal como lo indica el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, el cual dice de manera textual lo siguiente:

La cotización para salud establecida en el sistema general de salud para los pensionados está, en su totalidad, a cargo de éstos...

Frente al tema del principio de solidaridad que tienen los pensionados frente al sistema, ha tenido oportunidad de pronunciarse la Corte Constitucional, que en la sentencia C-126 de 2000, al declarar exequible el inciso segundo del artículo 143 de la Ley 100 de 1993.

Igualmente, esta ha sido una postura sostenida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral en varias sentencias, entre otras en SL-529 de 2020, donde se ha indicado que el pensionado está obligado a efectuar el respectivo aporte desde el momento en que ostenta tal calidad.

En este orden de ideas, se autorizará a **Colpensiones** a descontar del valor del retroactivo, el porcentaje correspondiente sobre las mesadas ordinarias<sup>1</sup>, valor que deberá a su vez trasladar a la **EPS** a la que se encuentre afiliado el actor.

### **Procedencia de la indexación de las condenas**

Atendiendo a que los valores producto de la reliquidación a los que se condenó en el presente fallo se ven afectados por el fenómeno inflacionario es procedente su actualización al momento del pago por lo que se **condenará** a **Colpensiones** a reconocer la indexación atendiendo para ello a la fecha de exigibilidad individual de cada valor y el momento de su pago efectivo, para lo cual deberá aplicar la fórmula:  $Va = \text{Valor a indexar} \times \text{índice final} / \text{índice inicial}$ .

### **Costas**

Costas en esta instancia a cargo de **C.I. Uniban S.A.** y en favor del demandante, las agencias se fijan en la suma de **\$1'000.000**. En la primera instancia se **revoca** la condena en costas impuestas al actor y en su lugar se impone a **C.I. Uniban S.A.** el pago de estas.

Esta decisión se sustenta en el numeral 4) del artículo 365 del CGP, que dispone que cuando la sentencia de segunda instancia revoque la del inferior, la parte vencida en juicio deberá pagar las costas en ambas instancias.

### **Decisión**

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

## **RESUELVE**

**PRIMERO: REVOCAR** la sentencia de primera instancia dictada el día **25 de abril de 2022**, por la Juez Sexta Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ordinario laboral promovido por el señor **HUMBERTO DE JESÚS GÓMEZ GÓMEZ** contra **C.I. UNIBAN S.A.** y **COLPENSIONES**, para

---

<sup>1</sup>Lo anterior por cuanto no proceden descuentos en salud sobre las mesadas adicionales, de conformidad con el Decreto 1073 del año 2002.

lugar **CONDENAR** a **C.I. UNIBAN S.A.** a reconocer y pagar el cálculo actuarial por el periodo comprendido entre el **11 de septiembre de 1978** y el **30 de octubre de 1986**.

**SEGUNDO: ORDENAR** a **COLPENSIONES**, que, en un término no superior a un mes contado a partir de la ejecutoria de la presente providencia, liquide el título pensional a cargo del empleador **C.I. UNIBAN S.A.**, en favor del señor **HUMBERTO DE JESÚS GÓMEZ GÓMEZ** para lo cual deberá tener en cuenta que el periodo a liquidar es el comprendido entre el **11 de septiembre de 1978** y el **30 de octubre de 1986**, teniendo en cuenta el SMMLV para cada anualidad.

**TERCERO: CONDENAR** a **C.I. UNIBAN S.A.**, que, una vez reciba la liquidación efectuada por **COLPENSIONES**, en un plazo no superior a un mes debe cancelar el título pensional correspondiente.

**CUARTO: CONDENAR** a **COLPENSIONES**, que, dentro del mes siguiente a la recepción del pago del cálculo actuarial por parte de **C.I. UNIBAN S.A.** expida resolución en la que reconozca el pago del reajuste pensional causado entre el **1 de octubre de 2017** y el **31 de julio de 2022**, el cual asciende a la suma de **\$ 10.683.249**.

A partir del **1 de agosto de 2022**, **COLPENSIONES** deberá continuar reconociendo al actor por concepto de mesada pensional la suma de **\$1'284.225** a razón de 14 mesadas por anualidad, sin perjuicio de los incrementos legales a que haya lugar. Del valor del reajuste por mesadas ordinarias se autoriza el descuento de las cotizaciones en salud a cargo del pensionado.

**QUINTO: CONDENAR** a **COLPENSIONES** a reconocer y pagar al señor **HUMBERTO DE JESÚS GÓMEZ GÓMEZ** la indexación de cada uno de los mayores valores causados desde el 1 de octubre de 2017 teniendo en cuenta la fecha de su exigibilidad individual y la de su pago, para lo cual deberá aplicar la fórmula expuesta en la parte motiva.

**SEXTO:** Costas en esta instancia a cargo de **C.I. UNIBAN S.A.** y en favor del demandante, las agencias se fijan en la suma de **\$1'000.000**. En la primera instancia se **revoca** la condena en costas impuestas al actor y en su lugar se impone a **C.I. Uniban S.A.** el pago de estas.

La anterior decisión se notifica por **EDICTO**.

Radicado 05001-31-05-006-2017-00903-02  
Radicado Interno P1412222  
Asunto: Revoca sentencia


**LOS MAGISTRADOS**



**CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA**



**HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ**



**GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**



**SECRETARÍA SALA LABORAL**

**EDICTO VIRTUAL**

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

<b>Proceso</b>	Ordinario
<b>Demandante</b>	Humberto De Jesús Gómez Gómez
<b>Demandado</b>	C.I. Uniban S.A. y Colpensiones
<b>Radicado</b>	05001-31-05-006-2017-00903-02
<b>Decisión</b>	Revoca sentencia
<b>Magistrado ponente</b>	Carmen Helena Castaño Cardona

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/131> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

**CONSTANCIA DE FIJACIÓN**

Fijado el 18 de agosto de 2022 a las 8:00am

**CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN**

Se desfija el 18 de agosto de 2022 a las 5:00pm

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
**SECRETARIO**